

Gabriel Flores

Un proyecto progresista de país y de Europa

nuevatribuna.es, 4 de mayo de 2020.

El mundo afronta una crisis inédita de inciertos impactos y consecuencias. La evolución y la intensidad del desastre dependerán, en gran medida, de la capacidad de gobiernos e instituciones comunitarias para poner en pie medidas de solidaridad con las personas y los hogares, apoyo a las empresas y colaboración entre los países que compartimos riesgos, mercados, moneda y competencias.

Nunca antes se había hecho tan evidente la necesidad del apoyo mutuo ni tan relevante la acción del Estado para salvar vidas, contener la pandemia, restañar daños económicos y sociales, impulsar la recuperación de la economía y revertir la degradación de la biodiversidad causada por el modelo neoliberal de capitalismo y globalización.

La solidaridad y la cooperación son los valores básicos y las herramientas para superar esta crisis; más aún si la pretensión es lograr una salida que aumente la protección de las grandes mayorías sociales y promueva un futuro más democrático, equitativo y respetuoso con la naturaleza.

Una crisis original de gran capacidad destructiva

No estamos, en sentido estricto, ante una crisis de nueva planta, aunque presente numerosas novedades respecto a las del pasado. Tampoco se trata de una crisis provocada exclusivamente por un choque exógeno global, aunque lo aparente.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus paralizó la economía, por la obligada decisión de confinamiento de la población, e impactó sobre economías y sociedades profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto el aún hegemónico modelo capitalista neoliberal como la cohesión económica, social y territorial o las relaciones entre sociedad y medio natural se encontraban profundamente degradados. La acumulación de crisis económica, social y ecológica arroja luz sobre las vulnerabilidades heredadas y permite observar las destructivas relaciones de los mercados globales realmente existentes con la naturaleza, la biodiversidad y la sociedad en las que se instalaron y crecieron.

Al pensar en la posible evolución de esta crisis, los interrogantes se multiplican. Lo que propicia que las previsiones sobre la cuantía del hundimiento del producto o el fuerte incremento del déficit y la deuda públicos en 2020, más allá de la certeza de que serán más que notables, o sobre las transformaciones que se producirán en la próxima década tiendan a desentenderse de las restricciones que imponen la ausencia de datos y conocimiento sobre un futuro hoy indescifrable que requerirá de toda la capacidad de aprendizaje que atesora el género humano para gestionarlo.

¿Conviviremos con la pandemia durante unos meses, un año o varios? No lo sabemos. ¿Será reversible la desescalada del confinamiento?, ¿nos encontraremos de nuevo, antes de que acabe el año, con un rebrote que obligue a decretar nuevos estados de alarma y episodios de confinamiento? No lo sabemos.

Y en el terreno específicamente económico, ¿bastarán las medidas que se están tomando para impedir que la recesión se transforme en depresión?, ¿cómo se gestionará la montaña

de deuda pública que nos espera después de superar la pandemia?, ¿la hibernación de la economía y la previsible atonía de los mercados bursátiles, tras su reciente hundimiento, acabarán produciendo un verdadero crac financiero, con quiebras y rescates de bancos y otras entidades financieras, como en la anterior crisis global de 2008, o podrá evitarse?

En todo caso, el desastre ya se ha producido y nadie entendería, salvo los cegados por el sectarismo o por prejuicios doctrinarios, que se escatimen recursos para proteger la salud de la población y a los sectores sociales más vulnerables, se obstaculice la toma de decisiones o se propaguen infundios para obtener ventajas partidistas y obstaculizar la acción política de un gobierno legítimamente constituido.

Una compleja dinámica de acuerdos de difícil concreción

Tan peculiar y compleja crisis global y la ausencia de certezas propician la demanda al Estado de más protección e impulsan la exigencia ciudadana a los partidos políticos para que, si no quieren participar en la búsqueda de soluciones compartidas, al menos, no se conviertan en factores de ingobernabilidad.

La envergadura de la crisis y lo descomunal de los retos que plantea son los factores que empujan a la toma de conciencia sobre la necesidad de un diálogo político y social que dote de mayor capacidad de respuesta al conjunto de las instituciones del Estado y proporcione bases más sólidas y estables a la gestión gubernamental.

La ingente tarea que el Gobierno de coalición progresista está llevando a cabo no puede desarrollarse en buenas condiciones con los frágiles apoyos parlamentarios con los que cuenta o en medio de la crispada ofensiva de los dos principales partidos de las derechas para intentar sustituir a Sánchez y romper la coalición gubernamental.

La iniciativa planteada por Sánchez para emprender un diálogo sin exclusiones y explorar acuerdos que refuercen las medidas contra la pandemia e impidan que el ruido y la ingobernabilidad tomen asiento, responde al sentir mayoritario de una ciudadanía que reclama más estabilidad política y colaboración entre las fuerzas políticas, sindicales y sociales para contribuir a mejorar la gestión de la crisis. Nadie puede asegurar hoy que ese camino de diálogo y acuerdos sea transitable ni qué recorrido tendrá, pero era necesario proponerlo e iniciarlo con el objetivo de poder atravesar este grave periodo de crisis en condiciones de ayudar a las clases trabajadoras, las empresas y los sectores más vulnerables; pero también, para dar continuidad al proyecto progresista de país y de Europa que sostiene el Gobierno y que, de no haber tomado Sánchez esta iniciativa, en pocos meses podría haber sido batido por la inestabilidad política y el desastre económico.

Casado duda. El líder de la oposición se ve presionado por una ultraderecha que pretende una victoria rápida y avasalladora sobre Sánchez y la coalición de gobierno progresista, pero tampoco puede dejar de participar en la propuesta de diálogo, para intentar condicionar los acuerdos que puedan adoptarse, ni hacer oídos sordos a las recomendaciones de algunos de sus valedores y apoyos para que juegue sus cartas de oposición con más prudencia y plazos algo más largos. Este es el nudo gordiano de la negociación.

Las posibilidades de un gran pacto de Estado, [a la manera de los Pactos de la Moncloa](#), parecen muy reducidas. Sin embargo, no lo son tanto las de promover una dinámica de acuerdos en diferentes ámbitos que puede dar aire a la continuidad del Gobierno progresista

y al núcleo de sus políticas de rescate social, ayuda al tejido empresarial y mayor unidad en las exigencias de solidaridad a nuestros socios de la UE.

El desenlace de esta iniciativa y las formas que pueda adoptar están por escribir. Y a pesar de los muchos obstáculos que presenta su realización, hay tres llaves que pueden abrir la puerta a una dinámica de acuerdos que debilite las pulsiones contrarias al diálogo que han prevalecido hasta ahora: primera, la disposición de la ciudadanía a favor del diálogo y la colaboración entre las fuerzas políticas; segunda, las mayores opciones de un acuerdo social entre sindicatos, patronal y gobierno, que tienen a su favor con una mayor experiencia negociadora, una mecánica ya rodada y la imperiosa necesidad de acuerdos y financiación que protejan tejido productivo y empleos e impulsen la reactivación económica; y tercera, la cooperación entre Administraciones Públicas para coordinar competencias y mecanismos de gestión y financiación que permitan fortalecer la sanidad pública, hacer más eficaz la lucha contra el coronavirus y preservar y modernizar el tejido empresarial localizado en su territorio.

Esas tres llaves o vías de diálogo y acuerdo pueden abrir espacios de negociación en terrenos que ahora parecen obstruidos o inimaginables.

Una Europa solidaria capaz de ofrecer protección y futuro

La ciudadanía reclama que fuerzas políticas, agentes económicos y sociales y el conjunto de las instituciones del Estado superen la crispación reinante y entiendan la necesidad de encontrar puntos de encuentro y colaboración efectiva que permitan minimizar daños, reactivar la economía y recuperar los empleos y salarios perdidos.

Esa mayor conjunción de esfuerzos no es bastante. Sin una mayor influencia en los cambios institucionales y de política económica que siguen pendientes en la Unión Europea no hay solución para los problemas a resolver por la economía española. Y sin Europa, tampoco se podrá construir una alternativa a la crisis que sufre la globalización neoliberal, marcada en los últimos años por una pugna entre dos superpotencias, China y EEUU, que no están en condiciones de ofrecer un modelo de globalización multilateral capaz de sustentar un desarrollo económico inclusivo y respetuoso con la democracia, los derechos humanos y la naturaleza.

Las medidas tomadas en las últimas semanas por las instituciones comunitarias han proporcionado mayores márgenes presupuestarios, estabilidad de las primas de riesgo y recursos financieros al Gobierno Sánchez para contener la pandemia, concretar el rescate social y empresarial o evitar en lo que resta del año el colapso económico y financiero. El problema principal, ahora, no es tan dramático ni urgente: los recursos financieros disponibles son muy insuficientes para impulsar la recuperación de la economía en 2021 y 2022. Hace falta que Europa diseñe y financie un plan de inversión modernizadora que impulse una reactivación económica que no solo considere la recuperación del crecimiento y el producto perdidos, sino también y sobre todo su calidad, tanto en términos de equidad y cohesión como de impulso de actividades y empleos de futuro y efectiva descarbonización de la actividad económica.

Es ese plan de inversiones y su financiación lo que ha comenzado a debatir el Consejo Europeo y se tiene que llenar de contenido el Consejo Europeo en los próximos meses, porque ni España ni los otros países del sur de la eurozona están en condiciones de financiarlo.

Holanda, Alemania y el resto de países del norte de la UE rechazan toda transferencia permanente de rentas y la mutualización de riesgos que supondría la emisión de eurobonos. Y han convertido en seña de identidad su rechazo a esa fórmula de mutualización de deuda que reclaman los países del sur de la eurozona y los grupos políticos progresistas verdes, socialdemócratas e izquierdas del Parlamento Europeo.

Una parte importante de los gobiernos de los países de la eurozona y más de la mitad del Parlamento Europeo han hecho público su rechazo frontal y votado en contra de la opción de los eurobonos, por lo que es necesario negociar otro punto de encuentro que haga factible compartir costes y riesgos y permita constituir un fondo europeo de financiación capaz de impulsar la reconstrucción económica y social que los países del sur de la eurozona no pueden llevar a cabo sin la colaboración del resto de los Estados miembros con los que comparte el euro. Un acuerdo que tenga parecida eficacia que los eurobonos y que en nada impide seguir defendiendo los eurobonos como la forma más avanzada o eficaz de mutualización de deuda pública y mantener la construcción práctica de alianzas a favor de su aprobación en el futuro.

Las instituciones europeas se han movido mucho en los dos últimos meses y [han abierto la puerta a considerar nuevos mecanismos para compartir riesgos y costes](#), pero el avance es aún insuficiente. En los próximos días y semanas, el debate en torno a los contenidos y detalles de ese Fondo de reconstrucción económica y social vinculado al presupuesto de la UE que fue aprobado en el Consejo Europeo del pasado 23 de abril, definirá si la UE opta por seguir malgastando su más que notable potencial en pugnas ridículas que la fragmentan, dividen y debilita o elige convertirse en un factor de renovación e impulso del proyecto de unidad europea. Convendría que las fuerzas progresistas y de izquierdas pusieran todo su empeño en inclinar la balanza a favor de la segunda opción y no aceptaran por respuestas un no o calderilla.